

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

EXPEDIENTE: CNJP-PS-JAL-013/2014

DENUNCIANTES: MANUEL VILLASEÑOR
GUDIÑO

DENUNCIADA: ELISA AYÓN HERNÁNDEZ.

Asunto: Se notifica resolución emitida por esta
Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

México, Distrito Federal, 5 de mayo de 2014
CNJP-042/2014

**MTRO. LUIS ANTONIO ROCHA SANTOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DE
JALISCO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 84 y 92 del Código de Justicia Partidaria, y en cumplimiento a lo dispuesto por el resolutivo tercero de la resolución de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, emitida por esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria, recaída en el expediente al rubro citado, le notifico la misma, para los efectos legales a que haya lugar, adjuntando al presente oficio copia simple de la multicitada resolución.

Atentamente
"Democracia y Justicia Social"


Lic. Italy Dessire Ciani Sotomayor
Presidenta

Comité Ejecutivo Nacional

Insurgencias Norte 59
P.O. Box 66333
Ciudad de México, D.F.

T. (55) 5720-0600
www.pri.org.mx

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

EXPEDIENTE: CNJP-PS-JAL-013/2014.

ACTOR: MANUEL VILLASEÑOR
GUDIÑO.

PROBABLE RESPONSABLE: ELISA AYÓN HERNÁNDEZ.

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE.

México, Distrito Federal, a cinco de mayo de dos mil catorce.

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente identificado con la clave **CNJP-PS-JAL-013/2014**, formado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano MANUEL VILLASEÑOR GUDIÑO quien se ostentan como militante del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco y dirigente de los comerciantes y prestadores de servicio del sector popular de Jalisco, mediante la cual imputan una serie de acciones y omisiones a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, en su calidad de Ex-Regidora del ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que a juicio del denunciante, podrían encuadrarse en alguna de las causales de expulsión contenidas en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; y

RESULTANDO:

Del análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito se desprenden los antecedentes siguientes:

Comité Ejecutivo Nacional

Carretera México-Toluca 57
P.O. Box 1000
06000 México, D.F.

Teléfono 57 24 0000
www.pri.org.mx

I. Presentación del escrito que dio origen al procedimiento sancionador ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria. El diez de marzo de dos mil catorce, el ciudadano MANUEL VILLASEÑOR GUDIÑO, en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional y dirigente de los comerciantes y prestadores de servicio del sector popular de Jalisco, presentó ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de este Instituto Político Nacional en el estado de Jalisco, denuncia y solicitud de expulsión en contra de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, por la comisión de diversos actos y omisiones que en concepto del denunciante violentan el orden jurídico que rige al propio Partido Revolucionario Institucional.

II. Emplazamiento a juicio. La Comisión Estatal de Justicia Partidaria con la denuncia de mérito y anexos que se acompañaron a la misma, en fecha treinta y uno de marzo del año en curso, emplazó a la ciudadana Elisa Ayón Hernández, a efecto de que compareciera ante la propia Comisión a manifestar lo que a su legal interés correspondiera.

III. Contestación a la denuncia. Mediante escrito de fecha siete de abril de dos mil catorce, mismo que se recibió en la Comisión Estatal de Justicia Partidaria el ocho de abril siguiente, la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ manifestó, en lo que interesa, lo subsecuente:

“...

Que con este escrito, estando en tiempo y forma me presento a dar contestación al Acuerdo de fecha 11 de Marzo del año en curso, por lo que lo hago de la siguiente forma:

Que con este escrito me presento a dar contestación de las imputaciones que hace el militante MANUEL VILLASEÑOR GUDIÑO, respecto a que 'vengo a reiterar mi solicitud de expulsión de la ExRegidora Mtra. Elisa Ayón Hernández, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con base en los Estatutos de nuestro Partido y del Código de Justicia

Comité Ejecutivo Nacional

www.pri.org.mx

Partidaria,.....', a lo que debo de decirle a esta persona que de igual forma la suscrita reitera todos y cada uno de los puntos de contestación que realice al Acuerdo de fecha 27 veintisiete de Noviembre del año 2103 dos mil trece, dentro de los autos del expediente CEJP/JAL/AS/04/13, que se formo con su denuncia primera, y que se encuentra pendiente de resolverse en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de nuestro Partido Revolucionario Institucional.

..." (sic)

IV. Celebración de la Audiencia de Ley. El once de abril de dos mil catorce, se llevó a cabo, sin la presencia del denunciante y la probable responsable, la celebración de la Audiencia de Ley en la que se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes. De igual forma, la Comisión hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos. En virtud del estado procesal se decretó el cierre de instrucción.

V. Dictamen. El quince de abril de dos mil catorce, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del estado de Jalisco emitió el dictamen correspondiente dentro del procedimiento sancionador de mérito, mismo que dentro de sus puntos propositivos razonó:

"PRIMERA.- Tomando en consideración las constancias, antecedentes y fundamentos estatutarios y normativos invocados en el presente procedimiento intrapartidario, se propone a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, se emita resolución definitiva, en la que se decrete la **EXPULSIÓN DEFINITIVA** del Partido Revolucionario Institucional, de la Mtra. Elisa Ayón Hernández, del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

SEGUNDA.- Una vez que se emita la resolución definitiva correspondiente, se notifique personalmente a la Mtra. Elisa Ayón Hernández, al Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Guadalajara, al Presidente del Comité Directivo Estatal, así como mediante oficio en

Comité Ejecutivo Nacional

Car. Argüelles No. 15
C.P. Escobedo, Jalisco
Código Postal 47100 México D.F.

TRANSFORMANDO
www.pri.org.mx

los términos del artículo 139 del Código de Justicia Partidaria, a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional para los efectos correspondientes en el Registro Partidario.

TERCERA.- Remítase el presente Dictamen mediante escrito, a la Comisión Nacional de Justicia partidaria, para su consideración y efectos legales correspondientes." (sic)

VI. REMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del estado de Jalisco, remitió a este órgano de dirección, el expediente que se integró con motivo del procedimiento sancionador que ahora nos ocupa. Así mismo, sometió a consideración del Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria el dictamen al que se ha hecho referencia en el RESULTANDO anterior.

VII. RADICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria acordó, entre otras cuestiones, la **RADICACIÓN** del procedimiento de mérito, identificándolo con la clave alfanumérica al rubro citada.

VIII. Acuerdo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. El veinticinco de abril de dos mil catorce, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria ordenó que se integrara al expediente que ahora se resuelve, copia certificada tanto del escrito de presentación como del escrito contestación, ambos, de fecha seis de diciembre de dos mil trece, mediante el cual, la ciudadana Elisa Ayón Hernández dio contestación a la denuncia que originó la integración del expediente identificado con la clave CEJP/JAL/AS/04/13. Lo anterior, tomando en consideración lo que la probable responsable manifestó mediante escrito de fecha siete de abril de dos mil catorce. (RESULTANDO III)

Comité Ejecutivo Nacional

Carretera México-Toluca 36
P.O. Box 1000, PASEO
Ciudad de México, D.F.

Tel. 55 5274 0810
www.pri.org.mx

IX. PROCEDENCIA Y RESOLUCIÓN. Al no existir diligencia alguna pendiente por desahogar, se turnó a la Subcomisión de Derechos y Obligaciones de los Militantes del Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y, por tanto, procedió a dejar el presente asunto en estado de resolución, misma que se pronuncia al tenor de los siguientes;

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional es competente para conocer y resolver sobre el presente procedimiento sancionador; de conformidad con los artículos 211 y 214, fracciones I y XIII de los Estatutos vigentes del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 4, 10, fracciones I y III, 129, 130, 131, 132, 134, 141, fracción II, 142, 150 y 151 del Código de Justicia Partidaria de este Instituto Político Nacional; toda vez que se trata de un procedimiento de sanción presentado por el ciudadano MANUEL VILLASEÑOR GUDIÑO, quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco, mediante el cual imputa una serie de acciones y omisiones a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, en su calidad de Ex Regidora del ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que a juicio del denunciante, podría encuadrarse en alguna de las causales de expulsión a que se refieren los artículos 223, fracción II, inciso c) y 227 de los Estatutos de nuestro Partido.

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los agravios del presente asunto, este órgano de dirección procede a realizar el análisis de los requisitos de procedibilidad del medio

de impugnación, así como las posibles causas de improcedencia que en la especie pudieran actualizarse, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Justicia Partidaria, pues su examen resulta de oficio y preferente por tratarse de una cuestión de orden público tal como lo establece la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3LA 01/97, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO."¹

En este orden de ideas, cabe hacer mención que las causales de improcedencia y sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, a fin de no vulnerar con ello, el derecho de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 Constitucional; esto es, deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de demanda, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás constancias que obren en autos, de tal forma que, sin entrar al examen de los agravios expresados por la parte actora y las demás pretensiones de las partes, no haya duda en cuanto a su existencia.

En la especie, de las constancias que obran en el sumario se advierte que la ciudadana **ELISA AYÓN HERNÁNDEZ** no hizo valer alguna causal de improcedencia ni este órgano de dirección advierte la actualización de alguna de ellas.

Sentado lo anterior a continuación se estudiarán los requisitos especiales de procedibilidad de la denuncia planteada.

¹ *Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2005, pp. 317-318.
Comité Ejecutivo Nacional

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. En cuanto a los requisitos especiales de procedibilidad, cabe señalar lo siguiente:

1. Personería. La personería del ciudadano MANUEL VILLASEÑOR GUDIÑO quien se ostentan como militante del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco y dirigente de los comerciantes y prestadores de servicio del sector popular de Jalisco, se encuentra acreditada en términos de las constancias que integran el expediente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco, mismas que corren agregadas al expediente en que se actúa.

2. Legitimación. La denuncia, fue promovida por parte legítima, toda vez que conforme al numeral 141 del Código de Justicia Partidaria, corresponde interponerla a los militantes, sectores u organizaciones de este Instituto Político; lo que en la especie, sí aconteció, habida cuenta que el ciudadano MANUEL VILLASEÑOR GUDIÑO quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco, imputa una serie de acciones y omisiones a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, en su calidad de Ex-Regidora del ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que a juicio del denunciante, podría encuadrarse en alguna de las causales de expulsión a que se refieren los artículos 223, fracción II, inciso c) y 227 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.

3. Formalidad. El escrito de denuncia cumple con lo que establecen las hipótesis previstas por los numerales 68 y 141 párrafo segundo del ordenamiento legal invocado, porque para acreditar los

hechos se ofrecieron medios de convicción tendentes a acreditarlos, además de hacerse constar el nombre del acusado, las imputaciones que realizan, así como el nombre y firma autógrafa de quien denuncia.

Sentado lo anterior, procede el examen de fondo del presente asunto.

CUARTO. Imputaciones hechas a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ. Para efectos del estudio de la solicitud de sanción presentada en contra de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria es la autoridad partidaria competente encargada de la administración de la justicia interna dentro del Partido Revolucionario Institucional, y competente para la aplicación de sanciones a militantes que hayan incurrido en conductas contrarias a la normatividad interna del mismo, por tanto se procede al análisis de las presuntas faltas que cometió dicha militante como probable infractora de los hechos que, a decir del denunciante, constituyen la actualización de diversas fracciones del artículo 227 de nuestros Estatutos.

Sentado lo anterior, cabe hacer mención que el denunciante le imputa a la probable infractora, las siguientes conductas:

A. Que a principios del mes de noviembre de 2013 se publicó a través de los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, locales y nacionales, un audio en el cual se vincula a la entonces regidora ELISA AYÓN HERNÁNDEZ con actos irregulares en la Dirección Municipal de Panteones del Ayuntamiento de Guadalajara.

B. Que en la radio y en la televisión aparece un audio en el que se escucha a la citada ELISA AYÓN HERNÁNDEZ pronunciando palabras ofensivas y vulgares, amenazando y gritando y haciendo comentarios que afectan y ofenden al partido político al cual pertenecemos, así como a la dignidad de las personas; posteriormente, la entonces Regidora ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, aparece y afirma que es su voz la que se escucha en el audio antes mencionado y envía una disculpa pública por el contenido de la misma, evadiendo los comentarios en torno al fondo del asunto, empero, reconoce tácitamente las supuestas irregularidades surgidas en la Dirección Municipal de Panteones del Ayuntamiento de Guadalajara.

C. Que se han presentado varias denuncias en su contra, donde se le acusa de uso indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, adquiriendo varios inmuebles sin comprobar el origen de los recursos económicos para la realización de dicho gasto, levantando la sospecha de supuestos actos de corrupción, violentando con ello disposiciones de respeto a los valores de la militancia y la sociedad en general, que se consagran en las disposiciones de ética partidaria.

D. Que derivado de lo anterior, el seis de marzo del año dos mil catorce, el H. Congreso del Estado de Jalisco, ordenó la separación del cargo de Regidora de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, así como su inhabilitación para ocupar cualquier cargo en la administración pública por un período de diez años, con lo cual cree el denunciante que las faltas que se le imputan, encuadran en las conductas que ameritan expulsión, en términos del Código de Ética y del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional..

de actos ilícitos en materia político electoral. Sustentado su afirmación en la tesis de jurisprudencia: *NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.*

- Que el denunciante no aporta notas de diversos medios impresos de Jalisco, no certifica su contenido y de la lectura de dichas documentales no se advierte aceptación alguna respecto de la comisión de actos de corrupción. Sostiene su aseveración en las tesis aisladas: *NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS., NOTAS PERIODÍSTICAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO.,* y *PERIODICOS, VALOR DE LAS NOTAS E LOS.*
- Que el denunciante pretende comprobar la aceptación implícita de hechos de corrupción con el audio y video de una rueda de prensa de la ciudadana Elisa Ayón Hernández sujeta a proceso, sin que relate las circunstancias de tiempo, modo, lugar por las que considera que el medio probatorio resulta apto para acreditar el extremo de su pretensión. Además de que no describe los presuntos hechos contenidos en el disco correspondiente. Para respaldar su protesta invoca la tesis aislada: *VIDEOGRABACIÓN. SU OFRECIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DEBE SUJETARSE A LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA INSPECCIÓN OCULAR.*
- Que en materia electoral, la carga de la prueba en un procedimiento administrativo sancionador corresponde al quejoso o denunciante, sin que las simples afirmaciones

Comité Ejecutivo Nacional

Calle de la Reforma 55
P.O. Box 1000
México, D.F. 06000

Tel. (01) 5724-5000
www.pri.org.mx

vagas, genéricas y dogmáticas basten para acreditar la existencia de los hechos, ni su legalidad. Invoca para sustentar su afirmación la tesis de jurisprudencia: *CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.*

- Que respecto a la supuesta infracción a la ética y principios del Partido, la carga de la prueba para acreditar su violación compete a la quejosa, de conformidad con la tesis de jurisprudencia: *MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL.*
- Que las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, requieren por su naturaleza descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, sin que en la especie, se actualice tal supuesto, habida cuenta que con afirmaciones vagas y genéricas, el quejoso pretende que la Comisión determine la ilegalidad de actos que no se encuentran demostrados, fundando su queja en presunciones sin sustento y supuestas inculpaciones implícitas que son inexistentes. Sustenta su dicho en la tesis aislada: *PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.*

QUINTO. Justipreciación de pruebas. Este órgano de dirección considera pertinente llevar a cabo una relación, vertimiento y justipreciación de las probanzas que integran la presente denuncia:

Comité Ejecutivo Nacional

Carretera México-Toluca, s/n
C.P. 06700, México, D.F.
Tel. 55 52 00 00

Tel. 55 52 00 00
www.pri.org.mx

I. El denunciante ofertó como pruebas de su parte para acreditar la denuncia formulada las siguientes:

1. La documental pública, consistente en copia certificada del expediente número 21/2013, que se formó con motivo del juicio político que se promovió en contra de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, y del que se desprende que el Congreso local propuso sancionar a la ahora probable responsable con la destitución de su cargo como Regidora en Guadalajara, Jalisco, así como su inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de diez años, a partir de que sea aprobado en definitiva por el Pleno de la Asamblea el dictamen que se menciona.
2. La documental pública, consistente en la declaratoria de resolución condenatoria dentro del juicio político 21/2013 de fecha seis de marzo de dos mil catorce, emitida por el Pleno del Congreso local.
3. La técnica, consistente en un audio, mediante el cual se escucha la voz de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ pronunciando palabras ofensivas y vulgares, amenazando, gritando y haciendo comentarios que afectan y ofenden la imagen del Partido Revolucionario Institucional, así como a la dignidad de las personas.
4. Las documentales, consistentes en varias notas periodísticas de los periódicos de circulación tanto nacional como local: *La Prensa, Cúpula, Página 24 Jalisco, Milenio, Crónica, El Occidental, Mural,*

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Independencia 1000, 59
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Tel: 442 21 11 11

www.pri.org.mx

La Jornada de Jalisco, todos de fecha siete de marzo de dos mil catorce.

II. La denunciada no ofreció pruebas de su parte.

SEXTO. Análisis constitutivo de los elementos que integran las conductas y omisiones que se le imputan a la probable responsable. A efecto de determinar si en el presente caso a estudio se encuentran plenamente acreditadas, o no, las conductas y omisiones que se le imputan a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, este órgano de dirección considera necesario llevar a cabo, primeramente, un estudio del marco normativo rector de los procedimientos disciplinarios del Partido Revolucionario Institucional, a fin de determinar sus etapas y establecer si se encuentra tipificadas las conductas que se le imputan a la probable responsable.

En este orden de ideas, cabe hacer mención que los artículos de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que guardan relación con los procedimientos disciplinarios son los siguientes: 209 a 212, 214, 215, 223 a 228.

Sobre la base de lo dispuesto en los referidos Estatutos, el Código de Justicia Partidaria de este Instituto Político, regula las atribuciones de las Comisiones de Justicia Partidaria y hace referencia a los diferentes procedimientos y recursos de los que pueden conocer, dentro de los que se encuentran los artículos 8 a 12, 14, 21; por otro lado, los procedimientos instaurados por una denuncia tendentes a la aplicación de una sanción y los propios procedimientos están regulados en los artículos 129 a 154 del propio ordenamiento en comento.

Del análisis de dichos preceptos se advierte que dentro del sistema de justicia partidaria del Partido Revolucionario Institucional se da la regulación del procedimiento disciplinario y se explica su naturaleza conforme a lo siguiente:

1. Los órganos partidarios competentes actuarán previa denuncia presentada por los sujetos permitidos reglamentariamente.

2. Tales órganos son: la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, las Comisiones Estatales de Justicia Partidaria y la Comisión del Distrito Federal de Justicia Partidaria.

3. Los sujetos que pueden tener la calidad de denunciantes por conductas irregulares de los militantes son: a) los militantes; b) los Consejos Políticos; c) un Sector y, d) alguna Organización del Partido; en tanto que los que admiten la calidad de denunciados son: los militantes, un cuadro o un dirigente.

4. Las Comisiones de Justicia Partidaria tienen, entre otras atribuciones, las siguientes: emitir las recomendaciones que consideren necesarias para corregir actos irregulares de los militantes; fincar las responsabilidades que resulten procedentes, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad interna y **aplicar sanciones, amonestaciones, suspensiones temporales o definitivas de los derechos de los militantes y expulsiones.**

5. En caso de que la denuncia proceda, se le comunicará al afectado a quien se le hará saber quién lo acusa, los hechos que se le imputan para que actúe en consecuencia a sus intereses.

6. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de notificarse al presunto infractor se señalará la audiencia entre la subcomisión y el afectado para el desahogo de pruebas y alegatos.

7. Una vez agotada la instrucción, desahogo de pruebas y alegatos, se emitirá el dictamen correspondiente, que se someterá a la consideración del pleno de la Comisión Nacional.

8. Emitido el dictamen, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria hará la recomendación respectiva ante el pleno del Consejo Político Nacional.

9. En caso de que la Comisión considere con los elementos de prueba, que la denuncia es infundada, lo declarará así expresamente.

10. Si la Comisión Nacional estima fundada la denuncia continuará el procedimiento y declarará, según las conclusiones, la procedencia de la sanción.

11. Las sanciones que pueden aplicarse a los militantes del partido son amonestación privada, pública, suspensión temporal de derechos, inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas y **expulsión**.

Las primeras dos sanciones serán aplicadas por las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria y las tres últimas por la Comisión Nacional.

Existe un catálogo de irregularidades que pueden dar lugar a la expulsión del militante, por lo que es posible estimar que procede, entre

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgentes Norte 55
Cajal, Benito Juárez, D.F.
Código Postal 06702

Tel. (55) 5714-4344
www.pri.org.mx

otras razones, por atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido o por enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del Partido o cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas.

En los casos en que se considere que un militante ha incurrido en algunas causas de expulsión, la Comisión Nacional informará al Presidente del Consejo Político Nacional, la iniciación del proceso de sanción.

Ahora bien, de lo descrito se advierte que el procedimiento disciplinario pone en evidencia que tiene por objeto velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás normativas partidarias por parte de los militantes del partido, pues ante el incumplimiento de sus obligaciones se establecen diversas sanciones.

Esto es así, porque dentro de dicho procedimiento se dan específicas atribuciones a los órganos de justicia partidaria, que deberán garantizar el orden jurídico que rige al partido y que tienen intervención en el procedimiento disciplinario para decidir sobre las denuncias interpuestas, en el ámbito de su competencia.

El objeto de conocer, normar y dictaminar sobre las denuncias presentadas por militantes del partido a las Comisiones de Justicia Partidaria guarda relación con la previsión de los Estatutos del Partido de verificar que los militantes cumplan con sus obligaciones establecidas en la normativa partidaria, pues de lo contrario se hacen acreedores de las sanciones correspondientes.

Lo anterior guarda relación también con lo establecido respecto de los procedimientos en materia disciplinaria, en el artículo 27, apartado 1, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la obligación de que en los Estatutos de los partidos políticos se prevean las sanciones, los medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias, cuyas instancias de resolución no deben ser más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.

Sentado lo anterior, cabe hacer mención que de los medios de prueba señalados con los numerales 1, 2 y 4, valorados y justipreciados, este órgano de dirección llega a la convicción fundada de que los mismos resultan aptos, idóneos, suficientes y eficientes para tener por acreditadas las acciones y omisiones que se le imputan a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, pues con dichos elementos se encuentra acreditada la existencia de la siguiente conducta:

A. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas.

La fracción X del artículo 227 del ordenamiento estatutario tantas veces referido literalmente establece lo siguiente:

"Artículo 227. La expulsión procede por alguna de las causas siguientes:

X. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas;

...

Del artículo citado con antelación, limpidamente se advierte que la expulsión procede, entre otras causas, por cometer faltas de probidad en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan.

Al respecto, cabe hacer mención que la falta de probidad en su carácter de norma ética ha sufrido variantes en su concepción genérica, que van desde el sentir particular de una persona hasta la calificación social y jurídica de una conducta humana en el ámbito de la legislación penal. Cualquier persona física puede estimar que la conducta o proceder de otra implica una grave ofensa que debe ser reparada social o legalmente.

Por otra parte, si la falta de probidad es asimilable a la falta de honradez en el sentido de rectitud moral, a la intención o ánimo de apartarse del cumplimiento de ciertas obligaciones sociales o al incumplimiento del deber contraído, entonces resulta necesario fijarle requisitos o complementar el concepto con otros elementos de la conducta humana que permitan precisar tanto su alcance ético como su valor jurídico. De ahí la necesidad por entender su fondo conceptual para darle una adecuada aplicación.

El diccionario de la Real Academia Española define la voz *probidad* como bondad personal, hombría de bien, rectitud de ánimo, integridad y honradez. En su última edición, el *Diccionario Jurídico Espasa-Calpe* (1996) considera sinónimas las voces *probidad* y *honradez*, las cuales define como la calidad moral que obliga a una persona al más severo cumplimiento de sus deberes respecto de los demás.

En México, el maestro Mario de la Cueva, en su obra clásica de *Derecho mexicano del trabajo*, siguiendo a la doctrina francesa denominó a la falta de *probidad* deber de *fidelidad*, señalando que éste consistía en la observancia del cumplimiento de una obligación que una persona debía a otra.²

Nuestro más Alto Tribunal ha estimado como falta de probidad tratándose de la materia laboral el no proceder rectamente en el desempeño de las funciones encomendadas; obrar con mengua de la rectitud de ánimo o procediendo en contra de las mismas; afectar el patrimonio de la empresa o establecimiento o el del empleador o el resto del personal que ahí labore, y, en suma, todo daño o lucro indebido que vaya en contra del recto proceder.³

Por su parte, el principio de probidad en materia administrativa consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preminencia del interés general sobre el particular.

Así, válidamente podemos sostener que la falta de probidad a que se refiere la fracción X del artículo 227 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional se acredita cuando algún cuadro, militante o dirigente en el ejercicio de sus funciones públicas no observa una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo que se le asigna.

² CUEVA, Mario de la, *Derecho mexicano del trabajo*, 3ª ed., México, Porrúa, 1949, pp. 320-321.

³ *Semanario Judicial de la Federación*, volumen 59, número 6, quinta parte, p. 21. En igual sentido, tesis contenida en el volumen 81, quinta parte, p. 19, séptima época.

Lo anterior es así, pues la función pública es esencialmente un servicio público estructurado sobre pautas destinadas a servir a determinada comunidad. De ahí que su concepto no es limitativo.

Así se desprende que los militantes en cargos de dirigencia y responsabilidades públicas deben conducirse en todo tiempo con legalidad, dignidad y transparencia en los términos que imponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los documentos básicos del Partido, y en general las disposiciones jurídicas que rijan en el ejercicio de su encomienda.

El Partido Revolucionario Institucional observará la vigilancia y la administración del patrimonio que se encuentre en manos de cualquier priista, para evitar el uso indebido de los recursos.

Es por todo cuanto se ha dicho que la razón del supuesto que se comenta es que los militantes del Partido Revolucionario Institucional no lleven a cabo actos u omisiones que tiendan a la fractura de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de los militantes que integran este Instituto Político o bien que con sus acciones u omisiones dañen la imagen del Partido o que no se cumplan los fines que tanto constitucional como estatutariamente tiene asignados, pues como se ha sostenido, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, éste se rige por los principios y normas contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos, y en las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional, y que su observancia es obligatoria para todos sus miembros, organizaciones y sectores. Además, como entidad de interés público, tiene la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático de Derecho, lo

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgentes Norte #1
Col. Buenavista, Unidad
Cruzada, Cuadrante, Barrio, D.F.

TEL: 52 55-5500
www.pri.org.mx

cual se traduce, entre otros aspectos, en la obligación de cumplir con el principio de legalidad en su doble vía, por obligación jurídica y por convicción política.

En el caso particular, de las pruebas que obran en el sumario, en especial, de las identificadas con los números 1 y 2, documentales públicas a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido por los artículos 82 y 83 del Código de Justicia Partidaria, se advierte que la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ atentó de manera grave, contra los principios y normas contenidos en la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Ello es así, porque las documentales públicas a las que se ha hecho referencia, adminiculadas entre sí, generan convicción suficiente y hacen prueba plena, de que la probable responsable fue sancionada por el Congreso del Estado de Jalisco con la separación de su cargo como Regidora de Guadalajara, Jalisco, al haberse acreditado que había desplegado conductas deshonorables, faltas de ética, y la probable comisión de hechos delictivos en el ejercicio de las funciones públicas a su cargo, imputaciones que de ninguna manera fueron desvirtuadas por la probable responsable.

En efecto, de la documental pública consistente en el dictamen de la denuncia de Juicio Político interpuesta por JOSÉ DE JESÚS GREGORIO LÓPEZ LOZANO, en contra de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ en su carácter de Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, registrada bajo el número de expediente 21/2013; y de la documental pública consistente en la declaratoria de resolución condenatoria dentro del juicio político 21/2013 de fecha seis de marzo del año dos mil catorce, emitida por el Pleno del Congreso local, se advierte que:

- El Congreso del Estado de Jalisco determinó incoar el procedimiento de juicio político en contra de la ciudadana Elisa Ayón Hernández, en su carácter de Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.
- Giró diversos oficios a distintas autoridades municipales y al Contralor del Estado de Jalisco, a fin de que informaran si existían denuncias, quejas o procedimiento alguno en contra de la ciudadana Elisa Ayón Hernández, así como cualquier documentación como inconformidades, tolerancias o permisos relacionados con la instalación de comercios en espacios abiertos.
- Se recibió oficio DJM/DJCT/024/2014, suscrito por el Síndico Municipal en donde remite legajo en copias certificadas del procedimiento de responsabilidad administrativa radicado con el número de expediente UAQ/076/2013 del índice de la Unidad de Atención a Quejas, dependiente de la Secretaría de la Contraloría.
- Se recibió el oficio SEPAF/FIN/DGI/DIEA/283/2014, suscrito por la Lic. Lizeth Azucena Rendón Dueñas, Directora de Ingresos Estatales y Automatizados de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, mediante el cual se informó que en el Sistema Integral de Información Financiera de la Subsecretaría de Finanzas, se encontró el registro de tres vehículos a nombre de la ELISA AYÓN HERNÁNDEZ.
- Se recibió el cinco de febrero de dos mil catorce, el oficio 0207/DGJ-C/2013, signado por JUAN BAÑUELOS GUARDADO, Contralor del Estado de Jalisco, mediante el

cual manifestó que no se localizó denuncia, queja o procedimiento en contra de la multicitada denunciada.

- El entonces denunciante manifestó que las supuestas conductas atribuidas a la servidora pública denunciada redundaban en perjuicio del interés público, fundamental y de su buen despacho, alterando la forma de gobierno republicano, representativo y popular establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco y perturbando el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas y reguladas por la propia Constitución Política local.
- El siete de noviembre de dos mil trece, se difundió en los medios de comunicación, la grabación de un audio en el que se escucha que la Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Elisa Ayón Hernández, incurrió en abuso de autoridad, pues de la grabación a la que se ha hecho referencia, diáfamanente se advierte que atentó en contra de los derechos humanos y laborales de por lo menos dos empleados de la Dirección de Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Guadalajara.
- La probable responsable en ocho de noviembre de dos mil trece, ante los medios de comunicación aceptó que la voz que se escucha en la grabación es de ella, y ofreció disculpas por las palabras altisonantes al Partido Revolucionario Institucional.
- Las conductas que en su momento se le imputaron a la ciudadana Elisa Ayón Hernández quedaron debidamente acreditadas, y se encuadraron en los supuestos que prevé el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades.

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Independencia No. 55
C.P. Guadalupe, Jalisco
44600, Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 33 3611-0000
www.pri.org.mx

- La denunciada incumplió con lo que establecen las fracciones VII, XVI, XVIII, XXVI del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades, pues el Congreso del Estado de Jalisco consideró que no observó durante el desempeño de su encargo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
- En cuanto a su declaración patrimonial se desprendieron diversas inconsistencias, pues por una parte la denunciada declaró contar con dos automóviles de su propiedad, y la Directora de Ingresos Estatal y Automatizados de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, informó que la ahora probable responsable cuenta con un registro de tres vehículos a su nombre. Así mismo, la Regidora declaró contar con un lote de joyas con un valor de dos millones de pesos, y al realizar su declaración manifestó que realizó venta de joyas por un monto de dos millones seiscientos mil pesos. De igual forma, la ciudadana Elisa Ayón Hernández manifestó del año 2011 al 2013 que adquirió diversos inmuebles con un valor total de seis millones seiscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos, cuando ella por el mismo periodo obtuvo un ingreso de tres millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta.
- Es por todo cuanto se ha dicho que el Congreso del Estado de Jalisco determinó sancionar a la ciudadana Elisa Ayón Hernández con la destitución de su encargo, así como con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de diez años.

En este orden de ideas, es evidente que la ahora probable responsable cometió **faltas de probidad en el ejercicio de las funciones públicas que tenía como regidora encomendadas**, pues como se ha sostenido, durante el ejercicio de su encargo cometió conductas deshonorosas que quedaron acreditadas mediante el juicio político incoado en su contra, que concluyera con las sanciones referidas en líneas que anteceden.

En este sentido, de lo anterior se desprende que adicionalmente, se han conculcado los artículos 5, 11, 12 y 16 del Código de Ética Partidaria, que prevén que todo militante del Partido Revolucionario Institucional que ocupe un cargo público, debe mostrar su voluntad permanente de contribuir a la unidad del Partido, a su firme cohesión, a su capacidad orgánica para encabezar las demandas populares, a la aplicación de sus normas internas y a que siempre sea, ante los ojos de la sociedad, una Institución prestigiada y confiable, preservando los bienes de la nación encomendados a su cuidado, la eficiencia en su función y respeto a los altos intereses de nuestro país; exigiendo en todo caso probidad en sus actos, dejando de lado todo propósito de beneficio propio que cause ruptura o desprestigio del Partido.

Con ello también se actualiza lo dispuesto por el numeral 227, fracción X, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, al actuar con falta de probidad de manera deshonorosa y desleal en el ejercicio del cargo de elección popular que ésta ocupaba, pues el desempeño de la función pública implica la responsabilidad de ejercer un mandato legal y popular con el propósito de realizar debidamente todas aquellas actividades que corresponden al Estado en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que buscan satisfacer necesidades colectivas para que estas se desarrollen dentro del marco vigente del Estado de Derecho, siempre atento a las necesidades colectivas con el

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgentes Norte 94
Col. Buenavista, 04337
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.T. (55) 57 29-4000
www.pri.org.mx

objeto de lograr un correcto desarrollo político, económico y social de la población, en términos de igualdad de oportunidades y posibilidades, y sin perder de vista que todo priista en el ejercicio de un cargo público, debe observar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las disposiciones particulares de los Estados y Municipios.

Lo que en la especie no aconteció, como quedó acreditado el procedimiento de juicio político tantas veces referido y su resolución donde se determinó imponer la separación de la hoy denunciada del cargo que ostentaba como Regidora de Guadalajara, Jalisco, y la inhabilitación por un período de diez años para ejercer cargos públicos.

Por si fuera poco, con su actuación no sólo vulneró los principios esenciales que rigen la vida interna de nuestro Partido, sino que también dañó la imagen pública, generando una afectación ante la ciudadanía con su actuación, como se desprende de las notas periodísticas de circulación tanto nacional como local: La Prensa, Cúpula, Página 24, Milenio, Crónica, El Occidental, Mural, todos de fecha siete de marzo de dos mil catorce, pruebas a las cuales en términos de los dispuesto por los numerales 82 y 83 del Código de Justicia Partidaria, se les concede valor probatorio por generar indicios en cuanto a lo que en ellas se contiene, pues en lo sustancial se advierte que los medios de comunicación evidencian ante la opinión pública que la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, militante y cuadro del Partido Revolucionario Institucional, fue destituida de su cargo como Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, al habersele relacionado con actos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con la administración de panteones en el municipio en cita, así como que dentro de su gestión tanto como Diputada local como de Regidora del Ayuntamiento de

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Independencia 1010 15
Col. Benavente 44100
Culiacán, Guerrero, México D.F.

www.pri.org.mx

Guadalajara, ambos del Estado de Jalisco, se evidencia conforme a sus informes de declaración patrimonial que adquirió seis inmuebles con un valor superior a los seis millones de pesos, cuando los ingresos que ésta reportó, señalan que obtuvo por dicho periodo un aproximado de tres millones quinientos mil pesos, lo cual no sólo genera incongruencia e inconsistencia de lo informado por la hoy ex Regidora, si no que contraviene sus obligaciones de mantener informado al Órgano Superior de Fiscalización sobre su situación patrimonial, sino a la sociedad a la cual sirve al tener el carácter de servidora pública, pues obtiene sus ingresos de los impuestos que paga la ciudadanía y que provienen del erario, violándose con ello el principio de rendición de cuentas y transparencia a que todo servidor público se encuentra sujeto; circunstancias que evidentemente repercuten en la imagen y prestigio de nuestro Instituto Político, ya que como fue señalado en líneas precedentes, todo funcionario público de extracción priista debe guardar una conducta intachable, de eficiencia y limpieza moral.

A mayor abundamiento, vale la pena precisar que la probable responsable no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar las consideraciones aludidas en dichas notas periodísticas, por lo que son valoradas por esta Comisión Nacional en su carácter indiciario. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones el criterio de tesis de jurisprudencia correspondiente a la Tercera Época, con número de tesis 38/2002 y de registro 726, consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44, sostenido por la autoridad electoral de cuyo contenido y rubro se desprende:

**NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.** Los medios
probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas,

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Guadalajara No. 13
Col. Ansoniana, 46100
Deleg. Cuernavaca, Estado de Morelos, C.R.

Tel. 0155 5723 9309
www.pri.org.mx

sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.

Lo anterior, sin que pase inadvertido para este órgano de dirección el hecho de que la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ manifestó tanto en el escrito de presentación y de contestación a la denuncia que motivó la integración del expediente identificado con la clave CEJP/JAL/AS/04/13, misma a la que se remitió mediante el diverso de siete de abril de dos mil catorce que:

- Objeta todas y cada una de las pruebas que se acompañan a la denuncia.
- Se le ha sancionado de forma injusta, iniciando un procedimiento con el objeto de expulsarla del Partido, sin que se le escuche, por lo que considera que no se le respetó su garantía de audiencia, ya que se le aplica una

sanción con base en pruebas ilícitas y recortes de periódicos que no tiene sustento legal.

- A quienes la denuncian no le constan los hechos, por lo que son testigos de oídas.
- La medida provisional mediante la cual se le suspendió de sus derechos partidarios como militante excede dolosa y notoriamente las facultades de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria. De igual manera, la medida provisional se encuentra indebidamente fundada y motivada. Además, excede los principios de proporcionalidad y equidad.
- Las notas periodísticas, mediante las cuales el denunciante pretende probar las imputaciones que le hizo a la ciudadana Elisa Ayón Hernández solo pueden resultar, en el mejor de los casos, indiciarias respecto de la comisión de actos ilícitos en materia político electoral. Sustentado su afirmación en la tesis de jurisprudencia: *NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.*
- El denunciante no aporta notas de diversos medios impresos de Jalisco, no certifica su contenido y de la lectura de dichas documentales no se advierte aceptación alguna respecto de la comisión de actos de corrupción. Sostiene su aseveración en las tesis aisladas: *NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS., NOTAS PERIODÍSTICAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO.,* y *PERIODICOS, VALOR DE LAS NOTAS E LOS.*

- El denunciante pretende comprobar la aceptación implícita de hechos de corrupción con el audio y video de una rueda de prensa de la ciudadana Elisa Ayón Hernández sujeta a proceso, sin que relate las circunstancias de tiempo, modo, lugar por las que considera que el medio probatorio resulta apto para acreditar el extremo de su pretensión. Además de que no describe los presuntos hechos contenidos en el disco correspondiente. Para respaldar su protesta invoca la tesis aislada: *VIDEOGRABACIÓN. SU OFRECIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DEBE SUJETARSE A LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA INSPECCIÓN OCULAR.*
- En materia electoral, la carga de la prueba en un procedimiento administrativo sancionador corresponde al quejoso o denunciante, sin que las simples afirmaciones vagas, genéricas y dogmáticas basten para acreditar la existencia de los hechos, ni su legalidad. Invoca para sustentar su afirmación la tesis de jurisprudencia: *CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.*
- Respecto a la supuesta infracción a la ética y principios del Partido, la carga de la prueba para acreditar su violación compete a la quejosa, de conformidad con la tesis de jurisprudencia: *MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL.*



- Las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, requieren por su naturaleza descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, sin que en la especie, se actualice tal supuesto, habida cuenta que con afirmaciones vagas y genéricas, el quejoso pretende que la Comisión determine la ilegalidad de actos que no se encuentran demostrados, fundando su queja en presunciones sin sustento y supuestas inculpaciones implícitas que son inexistentes. Sustenta su dicho en la tesis aislada: *PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.*

Al respecto, cabe hacer mención de que aun y cuando la probable responsable tanto en su escrito de presentación como de contestación a la demanda objetó *todas y cada una de las pruebas que se acompañan a la denuncia*, no expresó el o los motivos en que sustentó su objeción.

En efecto, tanto del escrito de presentación como de contestación se advierte que la ahora probable responsable únicamente manifestó que objetaba todas las pruebas que se acompañaron a la denuncia sin que de las manifestaciones hechas por la denunciada se advierta que controvierte la suscripción o el contenido de los medios de convicción que objeta.

Aunado a lo anterior, cabe hacer mención de que la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ no solo objetó de manera genérica las pruebas que en su momento ofreció el denunciante, sin que haya hecho una particularización de cada una de ellas, sino que además, objetó y se

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgente 4144, 2º
Caj. Surcubierta, 06100
Cuajalajara, Jalisco, México

Tel. 011 52 55 5615-6660
www.pri.org.mx

refirió a las que obran en el expediente identificado con la clave CEJP/JAL/AS/04/13.

Es por todo cuanto se ha dicho que este órgano de dirección les concede valor probatorio pleno a los medios de convicción identificados con los números 1, 2 y 4. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 246/2011, identificada con el rubro: **OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN LA OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).**

Ahora bien, por cuanto hace a la prueba técnica señalada con el numeral 3, consistente en un audio, mediante el cual se escucha presuntamente la voz de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ pronunciando palabras ofensivas y vulgares, amenazando, gritando y haciendo comentarios que afectan y ofenden al Partido Revolucionario Institucional, así como a la dignidad de las personas; esta Comisión Nacional no le concede ningún valor probatorio, toda vez que se trata de una prueba ilícita a nuestro juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 constitucional, párrafos doce, trece y quince, que a la letra dicen:

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio."

Por lo anterior, toda vez que dicha grabación no cumple con los estándares constitucionales, carece de todo valor probatorio para los efectos del procedimiento en que se actúa.

SÉPTIMO. Forma de intervención. Por lo que respecta a la forma de intervención de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ cabe hacer mención que de los medios de prueba 1, 2 y 4 que obran en el sumario se advierte que la ahora probable responsable incurrió en faltas de probidad en el ejercicio de la función pública que tenía encomendada, pues del resultado de la denuncia de juico político y sus respectivas sanciones, se desprende que actuó de manera deshonrosa y deshonesto, y que dicha conducta fue desplegada de manera directa y personalísima por la hoy probable responsable, sin que mediara persona alguna que pudiera atenuar su grado de intervención y eventual responsabilidad.

Por ello, su grado de participación es directo, pues las acciones y omisiones que se le imputan las hizo sin intervención de otro sujeto, tal y

como se acredita de los medios de prueba que previamente han quedado detallados, teniendo así la calidad de autora material.

OCTAVO. Calificación de la sanción. Una vez que han quedado debidamente acreditadas las acciones y omisiones que se le imputan a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ se procede a imponer la sanción correspondiente.

El artículo 223 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional establece en lo que interesa que:

Artículo 223. Las sanciones a los militantes serán aplicadas por:

...

La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada. Para su individualización se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del infractor y la proporcionalidad de la sanción.

...

De igual forma, el artículo 154 del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional establece que para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de la sanción, así como la responsabilidad respectiva, la Comisión de Justicia Partidaria competente deberá tomar en cuenta si la falta fue levisima, leve o grave, a fin de proceder a graduar la sanción. Para ello, tomará en cuenta, entre otras, las siguientes:

- I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra.

- II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
- III. Las condiciones externas y los medios de ejecución; y
- IV. La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones.

Por su parte, el artículo 355, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales literalmente establece que:

“Artículo 355.

...

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

- a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;
- b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
- c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;
- d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;
- e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
- f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

De los artículos citados con antelación, se desprenden las circunstancias que este órgano de dirección tomará en cuenta para la imposición de la sanción que corresponda a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ.

Comité Ejecutivo Nacional

Carretera México-Toluca 20
Col. San Andrés Bello
Ciudad de México, CDMX, México

Tel: 55 23 41 65
www.pri.org.mx

Así, para calificar debidamente la falta, este órgano de dirección debe valorar:

1. El tipo de infracción. Las violaciones a los distintos preceptos jurídicos contenidos en los Documentos Básicos de nuestro Partido, señalados en el contenido de esta resolución, por parte de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, actualizan las infracciones previstas en el artículo 227, fracción X, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior es así en virtud de que ha quedado debidamente demostrado que la ahora probable responsable cometió faltas de probidad en el ejercicio de la función pública que tenía encomendada, tal y como se acreditó con las documentales identificadas con los números 1 y 2 y de las que se advirtió que la probable responsable actuó de manera deshonrosa en el ejercicio de sus funciones públicas, sin observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo que se le asignó, siendo obligación de los militantes en cargos de elección popular conducirse en todo tiempo con legalidad y transparencia, en los términos que imponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Documentos Básicos del Partido, y en general las disposiciones jurídicas que rigen el ejercicio de su encomienda.

2. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Estamos en presencia de una pluralidad de infracciones que se acreditaron cometió la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, pues como se ha sostenido la probable responsable atentó, de manera grave, contra la declaración de principios, Código de Ética, Estatutos e imagen y prestigio del Partido Revolucionario Institucional.

3. Los bienes jurídicos tutelados que se afectaron fueron el correcto desempeño de la función pública, la transparencia y la rendición de cuentas, todos ellos esenciales para este Instituto Político, mismos que se encuentran consagrados en nuestros Documentos Básicos de manera puntual.

4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción:

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso como son:

a) Modo: Las irregularidades atribuibles a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, consistentes en la infracción a lo dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción X de los Estatutos del Partido, y 15 del Código de Ética Partidaria, fueron desplegadas por la ahora probable responsable a través de la conducta deshonrosa producto de las faltas de probidad en el ejercicio de la función pública que tenía encomendada, ante las diversas irregularidades derivadas de su situación patrimonial, mismas que no fueron desvirtuadas pese a haber tenido oportunidad legal para hacerlo, como se desprende del juicio político incoado en su contra; así como su reprochable conducta respecto a los posibles actos de corrupción que fueron difundidos por los diversos medios de comunicación.

b) Tiempo: Los actos y omisiones que se imputan a la hoy probable responsable y que constituyen infracciones estatutarias que hoy son motivo de análisis en la presente resolución, fueron realizados por ella

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgentes Norte 50
Col. Progreso, 06706
Ciudad de México, México, D.F.

Tel: (01) 52 55 11 11 11
www.pri.org.mx

durante su gestión como Regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, como ha quedado acreditado con las constancias respectivas que integran el expediente en que se actúa.

c) Lugar: Los actos y omisiones que se imputan a la hoy probable responsable y que constituyen infracciones estatutarias que hoy son motivo de análisis en la presente resolución, fueron realizados por la ciudadana Elisa Ayón Hernández en el Estado de Jalisco, particularmente en Guadalajara, Ayuntamiento en el que se desempeñaba como Regidora. Lo anterior ha quedado acreditado de igual manera con las constancias respectivas que integran el expediente en que se actúa.

5. Proporcionalidad de la sanción. Dadas las consideraciones vertidas con anterioridad, lo procedente es imponer como sanción a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ su expulsión del Partido Revolucionario Institucional, sanción que es proporcional, pues las conductas y omisiones que quedaron debidamente acreditadas no son menores ni pueden pasar por desapercibidas. Por el contrario, se trata de infracciones graves que han generado un daño evidente y grave al Partido Revolucionario Institucional, y que implican la vulneración de principios esenciales que rigen a este Instituto Político Nacional, como son el correcto desempeño de la función pública, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que de imponer una sanción distinta, se correría el riesgo de que la hoy probable responsable continuara incurriendo en actos y omisiones que pongan en peligro tales bienes jurídicos fundamentales, afectando los intereses colectivos de los militantes y del propio Partido. Por lo anterior, se considera que la expulsión, dadas las circunstancias del caso, es una sanción que se

encuentra plenamente justificada y es proporcional a la gravedad de la conducta del justiciable.

6. Antecedentes de la infractora. En cuanto a los antecedentes de la denunciada, cabe hacer mención de que existen indicios de que de manera sistemática ha venido infringiendo con sus acciones y omisiones la normativa estatutaria del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse, y se

RESUELVE:

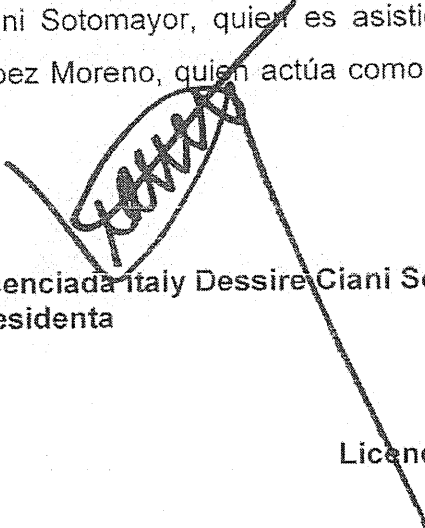
PRIMERO. Es **FUNDADO** el procedimiento sancionador instruido en contra de la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, por las razones y fundamentos legales que se precisan en los considerandos **CUARTO**, **QUINTO**, **SEXTO**, **SÉPTIMO** y **OCTAVO** de esta resolución.

SEGUNDO. En consecuencia, se **EXPULSA** como militante del Partido Revolucionario Institucional a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ, en términos de lo dispuesto en el Considerando **OCTAVO** del presente fallo.

TERCERO. Notifíquese personalmente a la ciudadana ELISA AYÓN HERNÁNDEZ en el domicilio señalado en autos; por oficio al Comité Ejecutivo Nacional, al Consejo Político Nacional, a la Secretaría de Organización y a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de Jalisco; por estrados al denunciante y demás interesados la presente resolución, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO. En su oportunidad, archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción IV del Código de Justicia Partidaria, fue autorizado para su firma y efectos normativos partidarios su Presidenta Licenciada Italy Dessire Ciani Sotomayor, quien es asistida por el Licenciado Rodrigo Octavio López Moreno, quien actúa como Secretario General de Acuerdos, y da fe.



Licenciada Italy Dessire Ciani Sotomayor
Presidenta



Licenciado Rodrigo Octavio López Moreno
Secretario General de Acuerdos